

## DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LÍDERES Y LIDERESAS COLOMBIANOS EXILIADOS EN LA CV

### PREÁMBULO

#### I.- COLOMBIA

Desde el fin del proceso de Independencia, Colombia ha estado inmersa en una sucesión de conflictos internos por la **cuestión del territorio**, es decir, por su ordenación y el ejercicio del poder sobre sus regiones, que implica, a su vez, control sobre recursos naturales y humanos.

Hacia mediados del s. XX, las tensiones derivadas de esa serie de enfrentamientos durante el XIX, dieron lugar al **periodo de La Violencia (1948-1958)**: un momento en el que las viejas hostilidades entre liberales y conservadores (los dos partidos políticos principales), desembocaron en violentas confrontaciones entre simpatizantes de ambos bandos, que incluyeron masacres, persecuciones y desplazamiento forzado. La ola de violencia condujo a la **consolidación de grupos armados al margen de la ley y fuerzas paramilitares**. La década del 60 vio surgir a las guerrillas de las FARC (1964) y el ELN (1964), y más tarde, en los 70, al M-19 (1970), al tiempo que terratenientes y narcotraficantes financiaban la creación de grupos de autodefensa contra esas guerrillas. Entre tanto, quienes en este escenario se abocaron a la defensa de los **derechos humanos**, enfrentaron amenazas, estigmatización e incluso atentados contra su vida o la de sus familiares -una situación que, al final, **forzó a muchos al exilio**-.

Después de **más de 50 años de conflicto armado**, en noviembre de 2016 se llevó a cabo la firma del **Acuerdo de Paz**, estableciendo las bases para la configuración de instituciones y la implementación de procesos de judicialización de los responsables y reparación de las víctimas, la reconciliación social, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una convivencia pacífica en el territorio; todo lo cual representó, en su momento, una luz de **esperanza para quienes defienden los DDHH**.

Sin embargo, hoy no solo ocurre que los **problemas estructurales causantes del conflicto persisten**, sino que en los últimos años varios factores han llevado al **resurgimiento de las dinámicas de violencia**. La falta de avances considerables en la implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Iván Duque (2018- 2022), las intervenciones predominantemente militares en zonas de conflicto donde prevalece la violencia contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, y las acciones y omisiones en su deber como mandatario, permitieron que actores armados y organizaciones criminales se diversificaran y expandieran en los lugares donde anteriormente hacían presencia las antiguas FARC.

Con ello, ha venido una reanudación y recrudecimiento de las **amenazas y ataques directos** (como atentados y agresiones físicas disgregadas por género) contra población civil de toda índole, pero particularmente contra **los líderes y lideresas medioambientales**, reclamantes de tierras y/o promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Esto ha obligado a muchas de estas personas a desplazarse internamente o a **buscar protección internacional en otros países**, sumándose así a las miles de personas exiliadas, que, tras años o décadas en el extranjero, se enfrentan ahora a la **imposibilidad de retornar a sus territorios**. En efecto, -de acuerdo con los datos sistematizados en la Base de Violencia Sociopolítica de la Comisión

Colombiana de Juristas- no sólo se registraron 202.394 violaciones a los Derechos Humanos durante los años 2021 y 2022 y se documentaron 160.148 desplazamientos, 35.666 amenazas, 4.609 homicidios, 499 masacres, 528 secuestros, 335 reclutamientos, 291 atentados, 244 desapariciones forzadas, 40 violencias sexuales y 34 torturas, sino que, además, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), **en 2024 Colombia fue el segundo país con más solicitudes de asilo después de Venezuela -53.564 solicitudes aproximadamente-**; una cifra a la que han de sumarse las cerca de 550.000 personas que tuvieron que salir del país a causa del conflicto armado (según cifras de la Comisión de la Verdad y ACNUR).

## II.- ESPAÑA

Desde la realidad española nos atañe, en particular, **el exilio**. En este contexto, los recientes cambios en la ley de extranjería de España (2024) han dificultado aún más la situación de miles de colombianos y colombianas solicitantes de asilo, entre quienes se cuentan los líderes y lideresas amenazados: **el aumento generalizado de las solicitudes de asilo** - según CEAR, con España como el segundo país receptor de solicitudes, con un incremento del 4% respecto a 2023-, **el decrecimiento de las concesiones de mayor protección para los solicitantes**, y **la falta de consideración del tiempo transcurrido como solicitante de asilo para acceder a las figuras de arraigo**, dejan a muchas personas en una situación de vulnerabilidad. A esto se suma el hecho de que, aun cubriendo lo relacionado con la salida y el desplazamiento de quienes se exilian (ya sea al país receptor o luego, en su retorno al país de origen), los actuales **programas de acompañamiento no las cobijan durante el periodo de adaptación o readaptación al país de destino** -un proceso que incluiría la consecución de un espacio para vivir, medios para el sustento y acompañamiento psicológico, entre otros. De ahí que defensores y defensoras de DDHH en Colombia que se encuentran en la Comunidad Valenciana postulen el reconocimiento del exilio como delito de lesa humanidad y, a través de la representación jurídica de la CCJ, pretendan que en el escenario judicial se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano frente a las omisiones en su deber de protección que los llevó al exilio forzado, ante la ausencia de medidas y garantías de seguridad frente al ejercicio de su rol como defensoras y defensores derechos humanos.

## III.- FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA

La anterior problemática pone de manifiesto una **preocupante crisis de DDHH**, así como la necesidad de establecer medidas y estrategias de trabajo conjunto de los gobiernos colombiano y español para responder a la realidad del país, más allá de los documentos oficiales que han llevado a muchos a asumir que la nación se encontraría ya en un estado de posconflicto, cuando se trata apenas de un estado de pos-acuerdo. Desde **Fundación por la Justicia condenamos y denunciemos la situación de vulneración de DDHH y desprotección de activistas y defensores/as de Derechos Humanos en Colombia y las que han tenido que exiliarse**. Creemos firmemente en los valores democráticos y de justicia, y para ello reivindicamos la necesidad de insistir en que la lucha por el cumplimiento y la protección de los DDHH, la defensa, las garantías y el respeto hacia los derechos fundamentales de todas las personas, son pilares básicos que debe tener cualquier Estado Social y Democrático de Derecho.

Nuestro proyecto **“Voces del exilio. Consecuencias del conflicto en Colombia para activistas de Derechos Humanos”** pretende, en primer lugar, concienciar a la sociedad valenciana sobre la situación de vulneración de las garantías fundamentales que sufren las

**personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales en Colombia -exiliadas en la Comunidad Valenciana-**, a consecuencia de toda la problemática desencadenada por el conflicto armado, en pos del respeto de los Derechos Humanos, la defensa de la democracia y la consecución del ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS.

Por otra parte, con esta acción se persigue **continuar forjando alianzas con entidades colombianas promotoras de Derechos Humanos** para generar sinergias mediante la firma de acuerdos de colaboración y participación, así como con **organizaciones valencianas promotoras de Derechos Humanos**, que nos permitan potenciar actividades de difusión y divulgación para fomentar una ciudadanía valenciana más crítica y sensibilizada en esta materia.

## **ACCIONES**

Informamos que, durante la **semana del 20 al 26 de octubre de 2025**, se han llevado a cabo distintas actividades con el propósito de informar y sensibilizar en el marco del presente proyecto, financiado por la Generalitat Valenciana. Las **actividades** realizadas fueron: una **reunión con el Consulado de Colombia en Valencia** (20 de octubre), un **coloquio participativo con entidades sociales y público en general** (21 de octubre), para favorecer el encuentro y establecimiento de sinergias entre las personas defensoras de DDHH en Colombia exiliadas en la CV, abogadas especialistas de la Comisión Colombiana de Juristas (que llevan adelante la representación, protección y defensa de víctimas del conflicto armado en Colombia con miras a la consecución de verdad, justicia y reparación, entre ellas, personas perseguidas por su activismo social), una abogada experta en asilo (representante del ICAV) y organizaciones de la Comunitat Valenciana vinculadas a la defensa y promoción de los DDHH.

Asimismo, se llevó a cabo un **encuentro de las defensoras de DDHH exiliadas en la CV con los estudiantes del Máster de Derechos humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Universitat de València** (23 de octubre) para promover el diálogo y el debate; así como **asistencias jurídicas individuales y grupales** que se llevaron a cabo los días 22, 24 y 26 de octubre.

A su vez, durante esta misma semana se recopilaron testimonios de defensores/as colombianos/as de DDHH para la realización de un **informe testimonial** y la elaboración de un **audiovisual documental** con el que se busca exponer, desde las propias voces de los y las defensores/as afectados/as de DDHH, hoy exiliados y residentes en la Comunidad Valenciana (CV), la situación a la que se enfrentan y llamar la atención sobre esta. Ambos productos estarán disponibles a través de la página web de Fundación por la Justicia (YouTube) para que puedan acceder con facilidad y a cuya visualización invitamos a toda la comunidad interesada.

## **PROPUESTA**

Remitimos a continuación la **propuesta de Declaración Institucional** que quisiéramos someter a su consideración para su suscripción.

**CONSCIENTES** de que:

- El respeto hacia la **democracia** y su preservación son pilares fundamentales de un Estado de Derecho cuya soberanía reside en el pueblo;
- La **vida y la integridad** son nociones básicas e inherentes a un Estado democrático y de Derecho;
- El **respeto y el reconocimiento** de Derechos Fundamentales por razones de origen, raza y género son garantías constitucionales otorgadas por España (artículos 9.2 y 14);
- La **Constitución Política de Colombia reconoce** plenamente la libertad de conciencia (artículo 18), la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento y opiniones (artículo 20) -incluidas las de índole política-, y la libertad a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político mediante las diversas instancias dispuestas para ello en el marco de una democracia (elección, constitución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, entre otras) (artículo 40).
- Son finés esenciales del Estado colombiano, “garantizar la efectividad de los principios, *derechos* y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, *política*, administrativa y cultural de la Nación; [...] y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” (artículo 2).
- El derecho a la vida y a la integridad física y moral -en virtud de los cuales se rechaza que las personas sean sometidas a tortura, penas o a tratos inhumanos o degradantes-, y la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social consagrados en nuestra Constitución (artículos 1. 1.10 y 2.1.15).
- La Consulta Previa, como garantía esencial para el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) y del pueblo Rrom o gitano, presentes en Colombia, es un Derecho Humano colectivo, el cual se ve respaldado en Colombia por los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, que establecen medidas de asistencia, atención, reparación integral, y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a los grupos anteriormente mencionados.

#### **PREOCUPADAS por:**

- La **situación de desprotección** de defensores y defensoras de Derechos Humanos en muchos países del mundo y, en particular, en Colombia;
- Los **episodios de amenazas, agresiones, impunidad y falta de protección estatal, desplazamiento forzado interno y exilio forzado** de los que son víctimas los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia;
- El **resurgimiento** de las manifestaciones de violencia relacionadas con el conflicto armado y la aparición de nuevos actores en disputa.

- La **dilación y dificultades en la implementación del Acuerdo de paz** a causa de falta de suficiente voluntad política y los desafíos a nivel político, social y económico.

#### **PEDIMOS:**

- Al **Estado español**, su implicación en la promoción de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el reconocimiento de la continuidad del conflicto en el país, a pesar de la firma del anterior acuerdo y la priorización de los asilos de las líderes y lideresas colombianas cuya vida e integridad física y/o moral se ve amenazada por causa del conflicto.
- Al **Estado colombiano**, su compromiso con dar continuidad e implementar medidas que le confieran mayor eficacia y eficiencia en la implementación del Acuerdo de Paz; el establecimiento de medidas eficaces de reparación integral a las víctimas del exilio por cuenta del conflicto armado que se han desplazado o buscan desplazarse a España y a la CV.
- Conjuntamente al **Estado colombiano** y al **Estado español**, para que se establezcan acciones y acuerdos que permitan implementar la ley 2421 de 2024 que modificó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y que reconoce el derecho a la reparación integral de las víctimas en el exterior, independiente de su estatus migratorio.
- A las **entidades promotoras y defensoras de los DDHH de la Comunitat Valenciana**, su implicación en el establecimiento y desarrollo de líneas estratégicas hacia objetivos comunes con líderes y lideresas sociales y activistas colombianas exiliadas en la CV y sus organizaciones, que permitan asegurar condiciones dignas y justas para los/las colombianos/as que se exilian en la CV.
- A la **ciudadanía valenciana**, el apoyo en la labor de denuncia de la situación de vulnerabilidad y riesgo de las personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia.